



Consejo Consultivo de Canarias

DICTAMEN 144/2011

(Sección 2ª)

La Laguna, a 25 de febrero de 2011.

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la *Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.F., C.S.R., S.A., en nombre de A.A.G.O., por daños ocasionados en la motocicleta, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 61/2011 ID)*.*

FUNDAMENTOS

I

1. Se dictamina la Propuesta de Resolución (PR) de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, que se ha tramitado por el Cabildo Insular de Tenerife por los daños que se alegan derivados del funcionamiento del servicio público de carreteras de su competencia.

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). La solicitud ha sido formulada por el Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con el art. 12.3 LCCC.

3. El afectado manifiesta que el 26 de diciembre de 2009, sobre las 22:30 horas, mientras circulaba por la TF-1, a la altura del punto kilométrico 07+500, perdió el control de su motocicleta a causa de la presencia en la calzada de una gran mancha, de lo que podía ser un derivado lácteo, cayendo sobre la vía y padeciendo desperfectos en ella y lesiones de diversas consideración, reclamando por ello la correspondiente indemnización.

* PONENTE: Sr. Suay Rincón.

4. En este supuesto son de aplicación, aparte de la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias, de 8 de mayo y el Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo, tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPRP). Asimismo es de aplicación la legislación de régimen local, específicamente el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), así como las normas reguladoras del servicio público prestado.

II

1. El procedimiento se inició con la presentación de la reclamación, efectuada el 14 de diciembre de 2010.

Obra en el expediente copia del escrito remitido por el Gobierno de Canarias al Cabildo Insular, que informa de la suspensión de las funciones traspasadas relativas a la TF-1, Tercer carril, Tramo Santa cruz de Tenerife-Güímar, p.k. 0+000 al 20+400, a causa de las obras enmarcadas dentro del Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento, correspondiendo su ejecución a la Consejería de Obra Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, que se realizaban en el tramo en el que acaeció el siniestro, punto kilométrico 07+500. El 3 de febrero de 2011 se emitió la Propuesta de Resolución objeto del presente Dictamen.

2. Concurren en el presente asunto, por otra parte, los requisitos establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulado en el art. 106.2 de la Constitución, que han sido desarrollados en los arts. 139 y 142 LRJAP-PAC.

III

1. La Propuesta de Resolución inadmite la reclamación, porque considera que, como en el tramo en el que se produjo el accidente se estaban ejecutando por la Administración de la Comunidad Autónoma las obras de ampliación del tercer carril de la TF-1, han quedado suspendidas las tareas de conservación y mantenimiento por parte del Cabildo Insular, en virtud de la normativa aplicable, careciendo por ello de las competencias de conservación y mantenimiento de la mencionada vía pública.

2. En efecto, la competencia de conservación y mantenimiento del Cabildo Insular estaba suspendida en la época del siniestro, en base a lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional. Y, dado que no consta comunicación alguna por parte de la Consejería referida de que es posible el uso normal de dicha carretera en la época del accidente, el Cabildo Insular, en aplicación de la normativa citada, carece de legitimación en este procedimiento.

3. Como ha señalado este Consejo en asuntos similares (entre otros, DCC 645/2009, de 19 de noviembre), en cumplimiento del deber de colaboración con otras Administraciones (art. 14 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias y el art. 55 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), procede dar traslado de la reclamación a la Consejería competente del Gobierno de Canarias a los efectos oportunos y se le notifique al reclamante a los fines pertinentes.

CONCLUSIÓN

Se considera que se ajusta a Derecho la Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen.